**ENIGMAS Y SOLUCIONES**

Una buena parte de los tomadores de decisiones se fueron de asueto en diciembre, pero los mercados no lo hicieron. De noviembre a la fecha, el precio del petróleo (mezcla mexicana), cayó 32 por ciento, el tipo de cambio se elevó 5 por ciento y la bolsa de valores de México disminuyó casi 6 por ciento.

Si bien la situación no es de pánico, ha ocasionado un desasosiego generalizado que se suma a la crisis de gobernabilidad derivada de Ayotzinapa, la licitación fallida del tren rápido a Querétaro y los cuestionados inmuebles de la primera dama y del Secretario de Hacienda.

El ánimo nacional está en el piso. Se percibe una falta de confianza en los gobernantes y en las instituciones.

Aún antes del descalabro petrolero, cambiario y bursátil, según la medición de opinión pública de GEA-ISA de fines de noviembre pasado, aproximadamente 4 de cada 10 ciudadanos no le cree nada al Presidente de la República y solamente uno de cada 8 personas, o más, tiene confianza en el gobierno federal o estatal, en la policía, en los partidos políticos (justo en la antesala de las elecciones), o en los juzgados. Son las mediciones más bajas que yo recuerdo desde 1997, ya que antes no contábamos con ellas.

A esto se agrega que uno de cada tres individuos siente enojo; uno de cada cuatro miedo y solamente uno de cada cinco tiene esperanza; este último grupo en franca minoría frente a los dos anteriores.

Este entorno afecta negativamente la racionalidad de las decisiones económicas. Las cifras de producción, de ventas, de exportaciones no petroleras, de construcción, de inversión en maquinaria y equipo, de empleo y de muchos otros indicadores más han mejorado paulatinamente desde julio pasado. La dinámica es relativamente clara: la economía se perfila para crecer en poco más de 3 por ciento durante este año, pero pocos que no sean analistas económicos están convencidos de ello. La cifra no es para aplaudir, aunque su tendencia es de ascenso, de mejoría y de oportunidades. No obstante, es difícil pedir a un empresario que amplíe su capacidad productiva o a un consumidor que gaste más cuando su raciocinio está empañado por el desánimo.

Las últimas mediciones de confianza empresarial y del consumidor no son alentadoras, más bien al contrario. Los empresarios revelan actualmente un momento adecuado para invertir entre 5 y 17 por ciento menor al nivel que estimaban al inicio de este gobierno. Por su parte, las expectativas de los consumidores con respecto al futuro de la economía familiar fueron 5 por ciento inferiores en diciembre pasado, en comparación con el nivel de inicio del sexenio.

Cuando los empresarios y los consumidores retraen colectivamente sus decisiones básicas, la economía sufre las consecuencias. Es un riesgo que no estaba en el mapa para este año, pero los acontecimientos han obligado a insertarlo.

¿Qué podría reestablecer la confianza ciudadana? En cuestión de corrupción las demandas sociales son claras y directas, según la opinión pública recabada: despedir y/o encarcelar a los corruptos, generar una policía especializada que aborde ese problema y que los funcionarios declaren su patrimonio con mayor transparencia. En cuanto a mejorar la seguridad, la sociedad clama por reformar las leyes con mayor eficacia y rapidez, a fin de devolver al gobierno el monopolio institucional de la violencia en beneficio de la armonía ciudadana.

Quizá estas soluciones no son exhaustivas, aunque precisamente por ello no parecen ser cosa de otro mundo. Son una simple derivación del sentido común. Los enigmas están en dos vertientes: uno, si la clase gobernante tiene la voluntad de satisfacer el clamor popular y retomar el liderazgo de la coyuntura y dos, si el desaliento ocasionado por mantener el país a la deriva sería capaz de anular la incipiente recuperación económica. Ojalá las incógnitas se despejen pronto.

*Socio de GEA Grupo de Economistas y Asociados*